

dos por cada parte, y no tenemos noticia de que por ninguna disposicion posterior se haya privado á los litigantes de la facultad que en aquella se les reconoce de servirse de más de un Abogado; pero hay una práctica constante de que informe un solo Abogado en nombre de cada parte, y en realidad, por complicado que sea el asunto y por mucho que éste se preste á separar el hecho del derecho ó á tratar con independencia las diferentes cuestiones que hayan de resolverse en el fallo, rara vez podrá considerarse deficiente la práctica admitida.

Conforme al art. 592 de la Ley orgánica del Poder judicial, corresponde al Presidente llevar la palabra en la Sala, sin que ningun otro, sin su permiso, pueda usarla; y es, por tanto, inútil advertir que los Abogados no deben comenzar sus informes sin que se les conceda.

Prescindiendo de las obligaciones, que pudieran calificarse de morales, que los Abogados tienen de llevar convenientemente preparados sus informes y de defender los derechos de sus clientes con todo el interés que ha de inspirarles el convencimiento de la verdad y de la justicia que debe haberles movido á tomar su defensa; obligaciones que, si dejaran de cumplirse hasta el punto de perjudicar á sus clientes por negligencia ó ignorancia, podrian dar lugar á que se les exigiera la responsabilidad legal consiguiente: (1) debemos recordar las disposiciones de los artículos 194, 195 y 196 de las Ordenanzas de Audiencias en que se previene que no han de interrumpir á los Relatores ó Secretarios en su relacion, ni á los demas Abogados en sus discursos, aunque adviertan en aquella ó en estos alguna equivocacion, esperando á que hubieren terminado y á que se les conceda la palabra para rectificarla: que mientras dure la vista no podrán salir de la Sala sin licencia del Presidente; y que en sus informes, lo mismo que en sus escritos, han de cuidar siempre de producirse con todo el decoro que corresponde á su noble profesion y á la autoridad de los Tribunales, y de guardar á estos el respeto que les es debido, evitando expresiones bajas, ridículas ó impropias del lugar en que se profieren ó de los Jueces á quienes se dirigen, sin apoyar nunca sus argumentos sobre hechos supuestos ó desfigurados, ó sobre supuestas disposiciones ó doctrinas legales (2),

1 Leyes del libro 5º, tít. 22 de la Novísima Recopilacion y otras; art. 371 del Código penal.

2 Aunque no se refiere á citas ó alegaciones hechas verbalmente en una vista sino á un escrito fundando un recurso de casacion, creemos deber recordar, por analogía con lo que se consigna en el texto, que el Tribunal Supremo, por sentencia de 21 de Febrero de 1867, declaró en un considerando "que cuando en contravencion á terminantes prescripciones le-

ni divagar á especies impertinentes é inconexas, ni extraviarse de la cuestion.

A su vez los Jueces y Tribunales, así como deben cuidar de que los Abogados les guarden el debido respeto y se arreglen á las leyes en el ejercicio de su profesion, están obligados á tratarlos con el decoro correspondiente, y á no ser que hablasen fuera de orden ó se excedieran de alguna otra manera, no les interrumpirán ni desconcertarán cuando informen en estrados, ni les coartarán directa ni indirectamente el libre desempeño de su cargo. (Reglamento provisional para la Administracion de justicia de 26 de Setiembre de 1835, art. 19.)

No hay necesidad de decir que los Jueces deben escuchar á los Abogados con atencion y sin permitirse distracciones ó manifestaciones de desagrado ó de impaciencia que les desanimen, ó les turben, ó de cualquier modo les coarten, sin perjuicio de que el Presidente, á quien exclusivamente corresponde llevar la voz de la Sala, les dirija en su caso las observaciones justificadas que autoriza el art. 332, ó les corrija en la forma á que se hayan hecho acreedores.

El art. 330 no fija el orden en que deben informar los Abogados, ó las partes en su caso, y solo al tratar de la vista de admision de los recursos de casacion en el fondo, dice la Ley (art. 1727) que informará en primer lugar el Abogado de la parte recurrente, despues el de la contraria, y por último el Ministerio Fiscal, si concurre á la vista como puede hacerlo en aquellas cuestiones. La ley anterior de Enjuiciamiento civil disponia en su art. 864 que en las vistas de las apelaciones, hablaria en primer lugar el Letrado defensor del apelante, y en seguida el del apelado, debiendo permitirse á ambos rectificar equivocaciones ó restablecer los hechos que hubiesen podido ser presentados con inexactitud. Pero, sin necesidad de buscar reglas especiales para cada caso, se comprende que han de hablar por el mismo orden con que las partes intervienen en las diversas actuaciones del juicio. La regla puede formularse recordando la de *beatus qui possidet*, tan citada en el foro. El que inventa variar la situacion de las cosas, sea por demanda, por apelacion ó recurso, habla primero. Ni aun en el caso de que haya mediado reconvention puede ofrecer este punto dificultad alguna, pues el caso mismo indica que ha de hablar primero el demandante para

gales se funda un recurso en hechos inexactos ó tergiversados, y se prescinde de la jurisprudencia reiteradamente consignada en sus fallos, se comete falta digna de correccion disciplinaria."

sostener la demanda, despues el demandado para contestar y sostener la reconvention, y por último el demandante otra vez para contestar á la reconvention, respecto á la cual es en realidad demandado.

Excusado es decir que la no concurrencia de una de las partes, no es obstáculo para que informe la que asista, si lo considera conveniente, aunque sea la demandada, y que lo que se indica respecto al orden no limita en nada aquel derecho que la ley reconoce á los que concurran al acto.

En las rectificaciones, que deben ser siempre breves y concisas, no es indispensable contraerse á los errores de hecho en que haya podido incurrir la parte contraria, y aun en las vistas de los recursos de casacion, á diferencia de lo que sucede en los de los juicios criminales, pueden hacerse rectificaciones de concepto, explicando cualquier idea ó argumentacion que haya sido mal comprendida ó interpretada por la otra parte.

Terminada la relacion ó lectura de la nota ó apuntamiento, si no hubieren concurrido las partes ni sus Abogados á la vista, ó terminados los informes, las rectificaciones, si las hubiere, y en su caso la exposicion de hechos de las partes que hubieren pedido y obtenido la palabra, el Juez ó Presidente declara terminado el acto, pronunciando la fórmula consignada en el art. 330.

Durante toda la vista, incumbe al Presidente de la Sala, auxiliado en caso necesario por ésta y por los porteros y alguaciles, que deben guardar la Sala conforme al art. 574 de la Ley orgánica del poder judicial, mantener el orden en ella, sin permitir que se turbe, ni por los Abogados, ni por el público, ni por nadie.

Así, no deben tolerar que los defensores se excedan en sus informes ó discursos, sustentando doctrinas subversivas ó reprobadas por las leyes, ni que exciten, con frases ajenas á la austeridad del foro, demostraciones ostensibles de aprobacion ó desaprobacion del auditorio. (Real orden de 7 de Octubre de 1845); no deben permitirles tampoco que en la defensa de sus clientes se descompongan contra sus colegas de una manera grave é innecesaria (art. 443), ni que traten al Ministerio fiscal, cuando concurra á las vistas, sin el decoro y la consideracion que se merece (Real orden de 5 de Mayo de 1856); y tanto en estos casos, si la falta no exigiere mayor correctivo, como cuando faltaren á las prevenciones que anteriormente hemos recordado de los artículos 194,

195 y 196 de las Ordenanzas de Audiencias, deben llamar á los Abogados al orden ó á la cuestion, y aun retirarles en caso necesario la palabra, sin que por ello se suspenda la vista ni tengan derecho á pedir nuevo señalamiento, y sin perjuicio de imponerles las correcciones disciplinarias que la Sala estimare procedentes.

Sin embargo, si llamados al orden pidieren y obtuvieren la vénia del Juez ó Presidente para explicar las palabras que hubieren pronunciado y de este modo lograren satisfacer cumplidamente al Juzgado ó Tribunal (art. 444), deberá concedérseles de nuevo la palabra para que continúen su informe en términos convenientes.

Los concurrentes que asistan á las vistas en la parte de la Sala destinada al público, han de estar, conforme al art. 660 de la Ley orgánica del Poder judicial, descubiertos, y han de guardar decoro y compostura, observando las disposiciones que para mantener el orden dicte el Presidente; y si alguno interrumpiere la vista, dando señales ostensibles de aprobacion ó desaprobacion, faltando al respeto y consideraciones debidas á los Tribunales, ó perturbando de cualquier modo el orden, debe ser amonestado en el acto ó expulsado del local, sin perjuicio de la responsabilidad en que pueda haber incurrido si sus hechos constituyeran delito, en cuyo caso deberá instruirse la oportuna causa criminal por el Juzgado de primera instancia correspondiente.

En último caso, si la perturbacion del orden llegara á constituir intimidacion ó fuerza, deberá declarar el Tribunal la nulidad de acto (artículo 442).

Véase sobre toda esta materia el título XIII, á que se refiere el art. 333, y su comentario.

Art. 334. El acto de la vista se acreditará en los autos por diligencia que extenderá el secretario ó escribano, expresando los nombres de los Magistrados que compongan la Sala, de los abogados que hayan informado, de los procuradores que hubiesen asistido y el tiempo que hubiere durado el acto.

Si alguno de los defensores de las partes hubiere deducido en la vista alguna pretension incidental que exija resolucion, se consignará tambien en dicha diligencia, la cual será leída en este caso á los defensores, terminada la vista, para que manifiesten su conformidad y la firmen. (*Ord. de Aud., artículo 112.—Ley org. del P. J., art. 482, núm. 7.º*)

Obedece este precepto en su primer párrafo, único á que se refieren

los concordantes citados, á la regla general del art. 249; y en el segundo, á la necesidad de consignar de algun modo las pretensiones á que alude. En esta diligencia deberá tambien expresarse, á nuestro juicio, si la vista se ha celebrado en audiencia pública ó á puerta cerrada, si ha formado Sala algun Magistrado extraño á su dotacion y ha de suspenderse, por tanto, por tres dias la votacion del fallo, si durante su celebracion se ha inhabilitado algun Magistrado sin hacer necesaria la suspension del acto, si se ha retirado la palabra á algun Letrado sin volver á concedérsela, si ha asistido el Ministerio fiscal en los casos en que pueda hacerlo y no figure como defensor de una de las partes, y toda circunstancia, en fin, de análoga entidad á las que quedan indicadas. Tambien creemos que deberán consignarse, aunque puedan no ser pretensiones que haya de resolver la Sala, las protestas que se estime conveniente formular sobre el número de Magistrados con que aquella estuviere constituida, sobre haber concurrido á constituirla algun Magistrado de la dotacion de la Sala cuya recusacion hubiere sido estimada anteriormente, ó sobre falta de personalidad, que ántes no hubiere podido manifestarse, de alguna de las partes, dando tambien en estos casos lectura de la diligencia á los defensores ó á las partes mismas, si éstas pudieran intervenir directamente en el juicio y hubieran formulado las pretensiones ó protestas consignadas. Por último; aunque el artículo solo habla de manifestar la conformidad á la diligencia y firmarla, no parece dudoso que haya tambien de consignarse la negativa á prestar la conformidad, indicando sucintamente el motivo que se alegue.

SECCION SEGUNDA.

DE LOS MAGISTRADOS PONENTES.

Llámase Ponente al Magistrado que dentro de cada Tribunal se encarga de estudiar aislada y particularmente, el negocio de que se trata, con objeto de informar acerca de la resolucion ó de otros incidentes, ó practicar por sí solo determinadas diligencias, que seria enojoso y dilatorio las practicara el Tribunal entero. Su institucion, es por lo tanto, sumamente útil, puesto que facilitan el despacho de los asuntos, y bien puede decirse que ántes de que la ley los estableciera los debia haber prácticamente; porque como satisfacen una verdadera

necesidad que se siente en Todo Tribunal colegiado, la misma necesidad debió crearlos. En nuestra patria, los tenia establecidos ostensiblemente, hace mucho tiempo, el Tribunal de la Nunciatura; despues se aplicaron á las causas criminales por la regla 8ª del Real decreto de 22 de Setiembre de 1848; y la ley de Enjuiciamiento civil anterior los introdujo para los negocios civiles, aboliendo al paso, la desdichada institucion de los Semaneros á que se refieren las Ordenanzas de las Audiencias (cap. 2º del tít 2º), y el decreto de 8 de Enero de 1854.

La ley de organizacion del Poder judicial, lo mismo que la presente, aceptan la ponencia, con el mismo espíritu con que la estableció la ley de 1855.

Art. 335. En el Tribunal Supremo y en las Audiencias, para cada pleito se nombrará un Magistrado Ponente.

Turnarán en este encargo todos los Magistrados de cada Sala, con exclusion del Presidente.

Sin embargo, no estará éste exento cuando por cualquier motivo quede reducido á tres, con el Presidente, el número de Magistrados de una Sala. (*Ley ant., art. 36.—Ley org. del P. J., art. 674.*)

Los preceptos de este artículo no pueden ofrecer duda, y en tal supuesto solo habremos de decir, que como ya advertian otros comentadores de la ley anterior, y se comprende que quiere el Legislador al ver lo que dispone en el párrafo 3º (que en la ley de 1855 no contaba) es preciso que el turno que se establece para la ponencia sea equitativo en todo y por todo, pues ni seria justo que los pleitos se repartieran desigualmente, ni que á un Ponente se le diesen asuntos sencillos y vulgares, y á otro difíciles y de penoso estudio. La ley de 1855, queriendo, sin duda, preceptuar esa equidad en el reparto, indicaba que se llevaria *un riguroso turno* entre los Magistrados que compusieran cada Sala, con exclusion del Presidente.

Art. 336. Corresponderá á los PONENTES:

- 1.º Informar á la Sala sobre la procedencia de las reformas ó adiciones del apuntamiento solicitadas por los litigantes. Para este efecto se les pasarán *préviamente* los autos.
- 2.º Examinar los interrogatorios, posiciones y demas proposiciones de prueba que presentaren las partes, y califi-

car su pertinencia. Si se reclamare contra la calificación que hicieren, resolverá la Sala.

3. ° Presidir la práctica de las diligencias de prueba y recibir cualesquiera declaraciones que la Sala ordenare, sin perjuicio de lo dispuesto en el art. 254.

4. ° Autorizar las ratificaciones y hacer los discernimientos de todo cargo.

5. ° Someter de palabra á la deliberación de la Sala los puntos de hecho, los fundamentos de derecho y la decisión que á su juicio deba recaer, pero sin llevar formulado el proyecto de sentencia.

6. ° Redactar los autos y sentencias con arreglo á lo acordado por la Sala, aunque su voto no haya sido conforme con el de la mayoría.

En este caso podrá el Presidente de la Sala encargar á otro Magistrado la redacción de la sentencia, cuando por circunstancias especiales así lo estime conveniente.

7. ° Leer en audiencia pública las sentencias.

En este caso le suplirá el Presidente cuando no concurra la Sala el día en que se haga la publicación.

8. ° Todo lo demás que por disposición especial de la ley sea de cargo del Ponente. (*Ley ant., art. 37.—Ley org. del P. J., art. 675.*)

Las diversas obligaciones que se señalan, como propias del Magistrado ponente, justifican la definición que dimos al comentar el epígrafe de la presente sección; y examinando lo dispuesto en los ocho números de que consta el artículo, se ve que es en suma, lo mismo que la ley anterior y la orgánica de los Tribunales habían prescrito, sin más adiciones que aquellas que lógicamente determina la última frase del número quinto; los segundos párrafos de los números sexto y sétimo, á nuestro juicio, debieran constar solo en la ley orgánica de los Tribunales, al fijar las atribuciones de los Presidentes de Sala, y los que establece el número octavo con objeto de evitar dudas á que la suspicacia ó la mala fe podrían dar origen.

Art. 337. Será también obligación del Magistrado Ponente examinar si se han observado los trámites legales; si los escritos para los que esta ley establece fórmulas precisas, han sido redactados conforme á lo que en ella se prescribe, ó si se han cometido otros abusos, bien por exceso, bien por

defecto en la sustanciación del juicio, comprobando los que hubiere notado el relator; y si hubiere alguna falta que merezca corrección, llamará la atención de la Sala para que en definitiva pueda acordar lo conveniente, á fin de corregir el abuso y procurar la puntual y rigurosa observancia de esta ley, en su letra y en su espíritu, por todos los funcionarios que intervienen en los juicios. (*Orden de las Audiencias, art. 110, que cometía á los Relatores la primera parte del artículo precedente según lo hace el art. 319 de esta ley.*)

En la concordancia, indicamos que igual ó semejante obligación que la que en este artículo se impone á los Magistrados ponentes, tienen los Relatores, y en tal concepto bien pudiera parecer inútil ó improcedente, que unos y otros estén sujetos al mismo deber. Pero la ley ha querido sin duda, rodear de garantías la celebración y sustanciación de los juicios con arreglo á las prescripciones que ella misma establece y bajo tal punto de vista no resulta censurable el precepto que examinamos, porque como vulgarmente se dice, más ven cuatro ojos que dos, y en el Magistrado ponente concurre una autoridad que no tiene el Relator.

Prescindiendo, pues, del fondo, añadiremos solo que á nuestro juicio no hay razón para haber puesto la materia de este artículo, separándola de la del artículo anterior, pues hasta para facilitar la inteligencia ó el conocimiento de la ley, convenia, ya que se habla de obligaciones impuestas todas de un modo general é indeterminado, que de unas y de otras se tratase en un solo artículo.

SECCION TERCERA.

DE LAS VOTACIONES Y FALLOS DE LOS PLEITOS.

Esta Sección ocupa también el lugar que le corresponde. Los artículos que contiene están tomados de algunos de los en que la ley anterior establecía los preceptos generales y de otros de la ley sobre organización del Poder judicial, y puede decirse, desde luego, que sus disposiciones son, por regla general, acertadas.

Art. 338. Concluida la vista del pleito, podrá cualquiera de los Magistrados pedir los autos para reconocerlos privadamente.

Cuando los pidiesen varios, el que presida fijará el tiempo por que haya de tenerlos cada uno, de modo que pueda dictarse la sentencia dentro del término señalado para ello. (*Ley ant., arts. 49 y 50.—Ley. org. del P. J., art. 677.*)

Art. 339. Fuera del caso à que se refiere el artículo anterior, se discutirán y votarán los autos y sentencias inmediatamente despues de la vista; y si no fuere posible por impedirlo otras atenciones del servicio, señalará el Presidente el dia en que se hallan de votar, dentro del término señalado respectivamente por la ley. (*Ley ant., art. 51.—(Ley org. del P. J., art. 679.)*)

La ley anterior no ordenaba que se discutieran los autos y sentencias inmediatamente despues de la vista, sino que se limitaba à decir que en el mismo dia en que terminara la vista debia señalar el Presidente el en que habia de votarse la sentencia. La ley orgánica del Poder judicial se limitó tambien à indicar que podrian discutirse y votarse despues de la vista. Y por último, la ley actual, separándose de las anteriores, establece eso mismo como precepto obligatorio y general, y deja en el concepto de excepcion el de que el Presidente pueda señalar un dia distinto.

Desde luego se comprende el pensamiento del Legislador, que no es otro sino el de que la discusion y votacion tengan lugar cuando no pueden ménos de estar presentes ó gravadas en la memoria de los Magistrados las alegaciones que en la vista se hubieren hecho; mas aunque su propósito sea plausible, entendemos que no dejará de ofrecer inconvenientes en la práctica la disposicion en cuyo exámen nos ocupamos, y nos inclinamos à creer que hubiera sido mejor redactar el artículo en términos análogos à los en que está concebido el concordante de la ley orgánica, por que, ¿en qué disposicion y con qué ánimos de discutir quedarán los Magistrados despues de la vista? ¿No es positivamente preferible, puesto que de todos modos la sentencia ha de dictarse en el plazo señalado por la ley, que medie un dia por lo ménos, entre la vista y la discusion y votacion? ¿No estarian los Magistrados de esta manera más convencidos de su respectiva opinion y les seria más fácil presentar sus fundamentos? Y consecuentemente, ¿no es de creer, que en razon al mayor estudio del asunto se llevaria más fácilmente la discusion y seria tambien más fácil llegar à un acuerdo?

No obstante, como los Magistrados tienen derecho à pedir los autos para reconocerlos privadamente, y es de suponer, que en los casos graves é intrincados usen de su facultad, puede afirmarse que la innovacion introducida en el presente artículo y que acabamos de examinar no es verdaderamente esencial.

Art. 340. Despues de la vista ó de la citacion para sentencia, y antes de pronunciar su fallo, podrán los Jueces y Tribunales acordar, para mejor proveer:

1. ° Que se traiga à la vista cualquiera documento que crean conveniente para esclarecer el derecho de los litigantes.

2. ° Exigir confesion judicial à cualquiera de los litigantes sobre hechos que estimen de influencia en la cuestion y no resulten probados.

3. ° Que se practique cualquier reconocimiento ó avalúo que reputen necesario, ó que se amplíen los que ya se hubiesen hecho.

4. ° Traer à la vista cualesquiera autos que tengan relacion con el pleito.

Contra esta clase de providencias no se admitirá recurso alguno, y las partes no tendrán en la ejecucion de lo acordado más intervencion que la que el Tribunal les conceda. (*Ley ant., art. 48.*)

Por más de que se trate de autos que han de dictarse y diligencias que han de practicarse despues de la vista ó de la citacion para sentencia, no creemos que se ha seguido buen método incluyendo éste y los dos artículos siguientes en la presente seccion, pues anunciando en su epígrafe que en ella se prescribe el procedimiento para las votaciones y fallos de los pleitos, y habiéndose empezado à desarrollar tal materia en los artículos 338 y 339, nada justifica que se trate de otra totalmente distinta en el fondo, interrumpiendo aquella y cuando muy bien pudieron desarrollarse formando dos secciones diferentes.

Los autos para mejor proveer tienen su fundamento en el mismo fin de los Tribunales de justicia, pues llamándose así, como dicen los Sres. Manresa, Miquel y Reus, à los que dictan los Jueces y Tribunales antes de la sentencia, acordando que se practique alguna diligen-

cia que consideran conveniente para resolver la cuestion con mayor acierto, y siendo aquel fin la administracion de la propia justicia, es claro que al dictarse un auto para mejor proveer no puede ménos de ser sino con objeto de aclarar los hechos, de esclarecer la verdad, de procurar la buena y recta administracion de justicia, y por lo tanto, que nuestra primera afirmacion, de que su fundamento está en el fin de los Tribunales, es completamente cierta. En último extremo, puede decirse que lo prueba nuestra misma legislacion, porque al establecer los autos de que tratamos nuestras modernas leyes de Enjuiciamiento siguen el espíritu de la 11, título 4º, Partida 3ª, que decia: "la verdad es cosa que los juzgadores deben catar en los pleitos sobre todas las otras cosas del mundo, é por ende quando las partes contienen sobre algun pleito en juicio, *deben los juzgadores ser acuciosos en pensar de saber la verdad dél por cuantas maneras pudieren...*"

Pero los autos para mejor proveer, ¿proceden en todos los juicios? ¿Pueden dictarse en todas las instancias? Hé aquí dos cuestiones que ilustres comentaristas de la ley anterior proponian, y que la actual ha dejado sin resolver explícitamente. Nosotros, conformándonos con la opinion de los autores que en este mismo comentario hemos citado, estimamos que deben resolverse afirmativamente, pues al conceder la facultad de dictar los autos á los Jueces y Tribunales, y no establecer limitacion alguna viene la ley á reconocer implícitamente que en cualquiera juicio que sea y esté en una ó en otra instancia caben los mencionados autos para mejor proveer.

Dicho esto, examinemos los cuatro números del artículo:

1º Que se traiga á la vista cualquiera documento que crean conveniente para esclarecer el derecho de los litigantes. Esta cláusula, cuya redaccion debiera ser otra, puesto que al decir *que se traiga á la vista* ha querido decirse *á los autos*, segun se deduce del contexto de todo el artículo, ha de entenderse que faculta á los Jueces y Tribunales para mandar traer á los autos todo género de documentos, porque siendo el fundamento de los autos para mejor proveer el esclarecimiento de la verdad, en lo cual deben los Jueces *ser acuciosos* conforme prescribe la ley de Partida citada, no se comprende que el derecho ó facultad de que se trata esté limitada, sino por la esencia misma de las cosas, ó lo que es igual, por la naturaleza de los documentos que puede mandarse unir, que han de tener relacion con el asunto y dar motivo á

creer que influirán, una vez conocidos, en que la resolucion definitiva sea más acertada.

2º Exigir confesion judicial á cualquiera de los litigantes sobre hechos que estimen de influencia en la cuestion y no resulten probados. El origen de esta confesion se encuentra en la ley 31, tít. 2º, libro 12 del Digesto, en la cual se dice: *Solent judices in dubiis causis, exacto jurejurando, secundum eum judicare qui juraverit*, y en la ley 3ª, tít. 1º, libro 4º del Código, que dice tambien: *In bonaefidei contractibus, nec non in caeteris, causis, inopia probationem per judicem jurejurando, causa cognita, rem decidi oportet*. La ley 2ª, tít. 12 de la Partida 3ª, consigna el mismo principio diciendo: "Pregunta es cosa de que nace grand pro. Ca por ella puede el juzgador saber más en cierto la verdad de los pleytos, é de los fechos dubdosos, que vienen ante él. *E puedla facer el Juez fasta que dē el juyzio...* é deve ser de tal natura, *que pertenezca al fecho ó á la cosa sobre que es la contienda*." Esta ley concuerda con el párrafo de la presente que examinamos, y la diferencia que entre ellos existe es la de que en la actual se marcan claramente los dos requisitos que deben concurrir en los hechos, objeto de la confesion, mientras que en la ley de Partida solo estaban indicados.

Y la confesion judicial de que aquí se trata no debe confundirse con la que pueden exigirse las partes hasta la citacion para definitiva, á la cual se refiere la ley al exponer los medios de prueba en el juicio de mayor cuantía, porque en tanto que esta última puede hacerse bajo juramento decisorio ó indecisorio (art. 580), la primera siempre se hace bajo juramento indecisorio ó supletorio, y la índole de una y de otra son tan completamente distintas como diversos pueden ser sus efectos. Tampoco debe confundirse la confesion judicial de que venimos hablando con el *juramentum in litem* de los romanos, conocido entre nosotros con el nombre de *juramento estimatorio decisorio del pleito*, que es el que á falta de otra prueba exigia el Juez al actor sobre el valor ó estimacion de la cosa demandada, para determinar la cantidad en que habia de condenar al reo (ley 5ª, tít. 11, Partida 3ª), y que segun puede comprenderse fijándose en esta definicion, se diferencia de aquella capitalmente.

Por último, sobre la época ó término en que ha de citarse á la persona que deba prestar la confesion, forma en que debe responder á las